



Junta General
del Principado de Asturias

XII LEGISLATURA SESIÓN DEL PLENO NÚMERO 19 (30 de abril de 2024)

ASUNTO NÚMERO 5

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox sobre bonificación autonómica a los impuestos de actos jurídicos documentados (AJD) y de transmisiones patrimoniales (ITP) y diversas bonificaciones estatales (12/0178/0084/04798)

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de febrero de 2024. La iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, serie B, número 121, de 21 de febrero de 2024).

El Grupo Parlamentario Vox, a través de su portavoz, Carolina López Fernández, al amparo de lo previsto en los artículos 216 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestros hogares son una prolongación de las familias sobre su entorno, siendo el medio natural para la realización de los fines personales, familiares y sociales que el Estado debe garantizar y proteger. Sin embargo, la enorme precarización de las condiciones laborales, especialmente para los jóvenes, imposibilita un mínimo ahorro; y los precios desorbitados de la vivienda, ya sea compra o alquiler, están impidiendo la emancipación de nuestros jóvenes y, en consecuencia, la muerte de sus proyectos familiares antes de siquiera poder empezarlos.

Los datos son demoledores. De acuerdo con Eurostat (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230904-1>), España es el cuarto país de la Unión Europea con la edad media de emancipación más tardía (30,3 años), solo por detrás de Croacia (33,4), Eslovaquia (30,8) y Grecia (30,7), y a la par que Bulgaria. Y la tendencia de los últimos años es inequívocamente mala. La tasa de emancipación en España ha caído de manera progresiva en los últimos quince años: si en 2008 se situaba en el 26 % el porcentaje de jóvenes españoles de entre 18 y 34 años que vivía fuera de casa de sus padres, esa cifra ha caído hasta el actual 16,3 %, según el informe del Observatorio de Emancipación, mientras que la media de la UE se sitúa en el 31,9 % (<https://www.cje.org/las-personas-jovenes-se-emancipan-a-los-303-anos-de-media-en-espana-la-cifra-mas-alta-de-los-ultimos-veinte-anos/>).

Si la situación ya era insostenible, la emergencia económica y social que hoy padecemos la ha empeorado exponencialmente. La drástica pérdida de poder adquisitivo de las familias, la subida de los tipos de interés y la galopante inflación, unida al precio prohibitivo de las viviendas, son los ingredientes de un colapso social y generacional que está arrinconando a generaciones enteras de jóvenes al sumidero de la subsistencia. Una generación entera de



desposeídos donde el derecho a permanecer y prosperar en sus barrios o pueblos es una quimera.

Según el Observatorio de Emancipación, la primera mensualidad de una hipoteca corresponde al 65,9 % del salario mediano joven y para pagar la entrada de una vivienda una persona joven tendría que ahorrar 53 796 euros —precio medio de la entrada de una vivienda libre en España—, el equivalente a cuatro años y medio de su salario neto íntegro.

Y hay culpables. Los sucesivos Gobiernos han convertido España en un páramo de falta de oportunidades para nuestros compatriotas y en un escaparate «en liquidación por cierre» para lejanas élites que gozan de beneficios fiscales que no se aplican para los nacionales y que redundan en mayores dificultades para acceder a una vivienda para las clases medias y trabajadoras.

En este contexto, el martes 13 de febrero, el Gobierno de España aprobó una línea de avales de 2500 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida a facilitar que jóvenes y familias con menores a cargo puedan acceder a la compra de la primera vivienda. Esta línea de avales se dirige a menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37 800 euros anuales (4,5 veces el IPREM) y a familias con menores a cargo, que se modificará en caso de que sea una pareja o tengan menores a cargo. Podrán solicitarla las personas físicas, mayores de 18 años, con residencia legal en España en los últimos dos años anteriores de manera acreditada e ininterrumpida. En el caso de que sean dos personas las prestatarias, ambas deberán cumplir estos requisitos. Además, las personas que piden la hipoteca no podrán tener un patrimonio superior a los 100 000 euros.

Una medida insuficiente que viene a parchear problemas estructurales que este Ejecutivo no hace más que empeorar con sus políticas, que impone unas condiciones irreales para el común de las familias españolas y que no impide que sean otros quienes capitalicen esta ayuda en detrimento de todos los españoles.

En cualquier caso, y aun asumiendo que la ayuda se ejecute correctamente, los jóvenes y familias que logren un préstamo hipotecario, aunque ya no tengan que tener un 20 % de la vivienda ahorrado, seguirán necesitando un ahorro de entre el 7 % y el 12 % dependiendo de la comunidad autónoma para hacer frente al impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) y al impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP).

En la compra de vivienda nueva las cifras anteriores se deben a la convivencia de impuestos nacionales y regionales. Así, los jóvenes que vayan a comprar una vivienda nueva, además del 10 % del impuesto sobre el valor añadido (IVA), deberán pagar en el Principado de Asturias un 1,2 % adicional, correspondiente al tipo regional del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD).

En Asturias la compra de vivienda de segunda mano por menores de 35 años tiene un tipo regional del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) del 4 %, cuando el valor sea menor de 150 000 euros, y del 6 %, cuando sea mayor.

A los costes anteriores, se añaden los del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de la financiación hipotecaria, que son del 1,5 % en nuestra región. Este impuesto por la financiación, si bien deben afrontarlo las prestamistas, supone un segundo obstáculo al acceso a la vivienda para los más jóvenes: por un lado, supone un desincentivo para las operaciones de financiación; por otro, es un coste que les puede ser repercutido en forma de comisiones y tipos diferenciales más altos.

En Vox no vamos a permitir que ni una sola traba fiscal ni burocrática trunque los anhelos y necesidades de los jóvenes y familias españolas. Es necesario garantizar que todos los españoles tengan un verdadero hogar en el que puedan desarrollar su proyecto de vida sin incertidumbre.



Junta General del Principado de Asturias

Los poderes públicos deben facilitar y hacer asequible el acceso a la vivienda en condiciones dignas y adecuadas, especialmente para los españoles más necesitados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Vox en Asturias formula la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a:

— Establecer una bonificación del cien por cien de la cuota tributaria del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) y del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para todos los supuestos contemplados en la línea de avales que ha anunciado el Gobierno de España.

— Reducir del 1,2 % al 0,5 % el tipo general del AJD para fomentar la transmisión de bienes inmuebles y favorecer de esta manera la actividad inmobiliaria, ayudando a reducir así los precios finales de la compra de viviendas y reactivando la actividad económica de un sector que consideramos locomotora económica.

— Establecer una bonificación del ITP en cuota del cien por cien para compra de vivienda habitual, cuyo precio sea inferior o igual a 300 000 euros, para familias numerosas y personas con discapacidad.

A su vez, insta al Consejo de Gobierno a instar al Gobierno de la nación a:

— Modificar la «Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias», para asegurar la igualdad esencial entre españoles en los impuestos cedidos, siempre reduciendo al mínimo la cuota tributaria, especialmente en el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) y en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP).

— Tomar las medidas necesarias para establecer una bonificación del cien por cien de la cuota tributaria del AJD y del ITP para todos los supuestos contemplados en la línea de avales que ha anunciado el Gobierno de España.

— A su vez, con carácter general, reducir el tipo general del AJD al 0,5 % y bonificar el ITP en cuota del cien por cien para compra de vivienda habitual nueva, cuyo precio sea inferior o igual a 300 000 euros, para familias numerosas y personas con discapacidad.

— Recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF para que los españoles con préstamo hipotecario vigente para su vivienda habitual puedan deducirse los intereses que abonan y compensar directamente en sus bolsillos la subida de tipos de interés, favoreciendo la adquisición en propiedad.

— Extender a toda la nación la deducción por gastos de alquiler en el IRPF para que todos los españoles con contratos de alquiler puedan deducirse parte de su coste y compensar directamente en sus bolsillos la subida del IPC.

— Modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con el fin de considerar no sujeta, a efectos de este impuesto, la adquisición de una primera vivienda por parte de un español.

Palacio de la Junta General, 15 de febrero de 2024. Carolina López Fernández, portavoz.